



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03959-2016-PA/TC

LIMA

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (SITRAMUN-LIMA), representado por CÉSAR DAGOBERTO PASSALACQUA PEREYRA (SECRETARIO GENERAL)

SENTENCIA INTERLOCUTORIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 20 de agosto de 2018

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Lima (Sitramun-Lima) representado por don César Dagoberto Passalacqua Pereyra contra la resolución de fojas 404, de fecha 18 de abril de 2016, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de autos.

FUNDAMENTOS

1. En la sentencia emitida en el Expediente 00987-2014-PA/TC, publicada en el diario oficial *El Peruano* el 29 de agosto de 2014, este Tribunal estableció, en el fundamento 49, con carácter de precedente, que se expedirá sentencia interlocutoria denegatoria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los siguientes supuestos, que igualmente están contenidos en el artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional:

- a) Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se invoque.
- b) La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial trascendencia constitucional.
- c) La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del Tribunal Constitucional.
- d) Se haya decidido de manera desestimatoria en casos sustancialmente iguales.

2. Respecto de doña Julbia Millian Sánchez, doña Alicia Virginia Azabache Soto, don Marco Antonio Luna Flores, don Edwin Dennis Rojas Martínez, doña Ruth Denny Condori Marca, don Edgar Eusebio Julca Valenzuela, doña Xenia Fortunata Matienzo León y doña Mónica Rosa Brañez Vilchez es de mencionar que en la sentencia emitida en el Expediente 00738-2011-PA/TC, publicada el 25 de mayo de 2011, este Tribunal declaró infundada la demanda de amparo por considerar que, de conformidad con las sentencias emitidas en los Expedientes 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC, así como en el auto emitido en el Expediente 00002-2010-



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03959-2016-PA/TC

LIMA

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE
LIMA (SITRAMUN-LIMA), representado por
CÉSAR DAGOBERTO PASSALACQUA
PEREYRA (SECRETARIO GENERAL)

PI/TC, el régimen de protección sustantivo-reparador contra el despido arbitrario, previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios (CAS), guarda conformidad con el artículo 27 de la Constitución. Por esta razón, al quedar demostrado que el demandante mantuvo una relación laboral a plazo determinado que culminó al vencer el plazo estipulado en su último CAS, la extinción de la relación laboral se produjo de forma automática, conforme al Decreto Supremo 075-2008-PCM.

3. Previamente se debe detallar el periodo en el que laboraron mediante contratos administrativos de servicios:

- a. Julbia Millian Sánchez laboró desde el 1 de junio de 2012 hasta diciembre de 2014 (fojas 117 y 119 a 156).
- b. Alicia Virginia Azabache Soto laboró desde el 3 de diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014, mediante contratos administrativos de servicios (fojas 160 y 168 a 192).
- c. Marco Antonio Luna Flores laboró desde el 5 de noviembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014, mediante contratos administrativos de servicios (fojas 197 a 233).
- d. Edwin Dennis Rojas Martínez laboró desde diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014, mediante contratos administrativos de servicios (fojas 238 a 264).
- e. Ruth Denny Condori Marca laboró en el último periodo desde el 13 de mayo de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2014, mediante contratos administrativos de servicios (fojas 292 y 296).
- f. Edgar Eusebio Julca Valenzuela laboró desde 1 de octubre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014, mediante contratos administrativos de servicios (fojas 300 y 307 a 323).
- g. Xenia Fortunata Matienzo León laboró desde octubre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014, y el último periodo que laboró con contratos administrativos de servicios fue del 1 de setiembre de al 31 de diciembre de 2014 (fojas 337 y 339 a 342).



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03959-2016-PA/TC

LIMA

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (SITRAMUN-LIMA), representado por CÉSAR DAGOBERTO PASSALACQUA PEREYRA (SECRETARIO GENERAL)

- h. Mónica Rosa Brañez Vílchez laboró en el último periodo de forma ininterrumpida, desde el 7 de setiembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2014, mediante contratos administrativos de servicios (fojas 345 a 347 y 351 a 353).
4. El caso de los demandantes doña Julbia Millian Sánchez, doña Alicia Virginia Azabache Soto, don Marco Antonio Luna Flores, don Edwin Dennis Rojas Martínez, doña Ruth Denny Condori Marca, don Edgar Eusebio Julca Valenzuela, doña Xenia Fortunata Matienzo León y doña Mónica Rosa Brañez Vílchez es sustancialmente igual al resuelto, de manera desestimatoria, en el Expediente 00738-2011-PA/TC por dos razones: 1) se pretende dejar sin efecto el despido del que han sido objeto los recurrentes, ordenándose su reposición en el cargo que venían desempeñando; y 2) ambas demandas se sustentan en que los trabajadores prestaron servicios personales, de forma ininterrumpida y sujetos a subordinación bajo el régimen de contratación administrativa de servicios en el último periodo que brindaron sus servicios, conforme obra a folios 117, 160, 197, 238, 292, 300, 337 y 345.
5. Con relación a los demandantes doña Eleodora Amalia Portal Jáuregui y don Jesús Toribio Benito Aguirre cabe recordar que en la sentencia emitida en el Expediente 04610-2011-PA/TC, publicada el 22 de marzo de 2012, este Tribunal declaró infundada la demanda de amparo por considerar que, de conformidad con las sentencias emitidas en los Expedientes 00002-2010-PI/TC y 03818-2009-PA/TC, así como en el auto emitido en el Expediente 00002-2010-PI/TC, el régimen de protección sustantivo-reparador contra el despido arbitrario previsto en el régimen laboral especial del contrato administrativo de servicios (CAS) guarda conformidad con el artículo 27 de la Constitución. Por esta razón, no correspondía analizar si los contratos civiles suscritos con anterioridad a la suscripción de los CAS se desnaturalizaron o no, pues dicho periodo es independiente de estos contratos. Se concluyó, entonces, que la relación laboral se extinguió por el vencimiento del plazo del último CAS.
6. Previamente se debe detallar el periodo en el que laboraron con contratos administrativos de servicios:



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03959-2016-PA/TC

LIMA

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (SITRAMUN-LIMA), representado por CÉSAR DAGOBERTO PASSALACQUA PEREYRA (SECRETARIO GENERAL)

- a. Doña Eleodora Amalia Portal Jáuregui laboró desde el 2 de mayo de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014, mediante contratos administrativos de servicios (fojas 60 a 72, 91 a 99, 101 y 102).
- b. Don Jesús Toribio Benito Aguirre laboró en el último periodo desde el 11 de abril de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, mediante contratos administrativos de servicios (fojas 276, 278 a 281 y 285 a 288).
7. El caso de los demandantes doña Eleodora Amalia Portal Jáuregui y don Jesús Toribio Benito Aguirre es sustancialmente igual al resuelto, de manera desestimatoria, en el Expediente 04610-2011-PA/TC por dos razones: 1) se pretende dejar sin efecto el despido del que han sido objeto los recurrentes y ordenar la reposición en el cargo que venían desempeñando; y 2) ambas demandas se sustentan en que inicialmente los demandantes prestaron servicios personales y sujeto a subordinación. Ello en virtud de contratos de naturaleza civil y a que, posteriormente, laboraron bajo el régimen de contratos administrativos de servicios (CAS) (fojas 60 y 276).
8. Con relación al alegato de que se estaría vulnerando la estabilidad laboral de sus afiliados, en autos no se han presentado pruebas que acrediten tal hecho.
9. Finalmente, con respecto a la aplicación del laudo arbitral de fecha 30 de enero de 2014, que reconocería la vigencia de la Ley 24041 para los trabajadores sujetos al régimen del contrato administrativo de servicios, debe advertirse que la citada ley no resulta aplicable a los trabajadores del régimen CAS, por lo que este extremo también debe ser desestimado.
10. En consecuencia, y de lo expuesto en los fundamentos 2 a 9 *supra*, se verifica que el presente recurso de agravio ha incurrido en la causal de rechazo prevista en el acápite d) del fundamento 49 de la sentencia recaída en el Expediente 00987-2014-PA/TC y en el inciso d) del artículo 11 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional. Por esta razón, corresponde declarar, sin más trámite, improcedente el recurso de agravio constitucional.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03959-2016-PA/TC

LIMA

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE
LIMA (SITRAMUN-LIMA), representado por
CÉSAR DAGOBERTO PASSALACQUA
PEREYRA (SECRETARIO GENERAL)

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú, el fundamento de voto del magistrado Sardón de Taboada, y la participación del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, convocado para dirimir la discordia suscitada por el voto singular del magistrado Ferrero Costa, y el fundamento de voto del magistrado Espinosa-Saldaña Barrera, que se agrega,

RESUELVE

Declarar **IMPROCEDENTE** el recurso de agravio constitucional.

Publíquese y notifíquese.

SS.

**MIRANDA CANALES
SARDÓN DE TABOADA
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA**

Lo que certifico:

JANET OTÁROLA SANTILLANA
Secretaria de la Sala Segunda
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03959-2016-PA/TC

LIMA

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (SITRAMUN-LIMA), representado por CÉSAR DAGOBERTO PASSALACQUA PEREYRA (SECRETARIO GENERAL)

FUNDAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Coincido con el sentido de lo resuelto por mis colegas, pero me permito señalar lo siguiente:

1. En primer término, y sin duda alguna, una preocupación central de quien imparte justicia en general, y de este Tribunal Constitucional en particular, es la de asegurar el cumplimiento de sus decisiones. En ese sentido, en la sentencia recaída en el Expediente 00002-2010-PI/TC se declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad, interpuesta en contra del Decreto Legislativo 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
2. Esto ha llevado a que el Tribunal Constitucional haya desestimado, en numerosas ocasiones, demandas donde trabajadores que laboraban al amparo de este régimen especial habían solicitado su reposición en el cargo que venían desempeñando en condición de trabajador permanente, alegando la desnaturalización de su contrato. Esta práctica constante, como queda claro, resulta coherente con lo decidido en la sentencia recaída en el Expediente 00002-2010-PI/TC.
3. Ahora bien, y más allá de lo señalado a nivel jurisprudencial, resulta pertinente recordar que el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) surgió con la intención de dejar atrás la Contratación por Servicios No Personales (SNP), ampliamente extendida a inicios de la década pasada. Sin embargo, resulta claro que, luego de varios años de utilización, no parece que este sistema de contratación responda actualmente al objetivo de forjar una administración pública eficiente, basada en la meritocracia y la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos públicos.
4. En efecto, ello no podía ser de otro modo dada la temporalidad o, mejor dicho, la transitoriedad que debía tener este régimen especial y que quedó plasmado en la Ley 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales, en cuyo artículo 1 se dispuso como objetivo “establecer la eliminación del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, regulado mediante el Decreto Legislativo 1057. (...) La eliminación del referido régimen se efectúa de manera progresiva y de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente Ley”.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03959-2016-PA/TC

LIMA

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (SITRAMUN-LIMA), representado por CÉSAR DAGOBERTO PASSALACQUA PEREYRA (SECRETARIO GENERAL)

5. Sin embargo, y contra lo que pudiera pensarse, lo cierto es que, después de varios años, el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) no solo continúa existiendo sino que también ha venido creciendo de manera sostenida a una tasa promedio anual de 8% en el período 2009 – 2016, de tal forma que actualmente representan al 22% del empleo público sujeto a un régimen laboral, como bien se desprende del Informe “Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios”, emitido por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir).
6. Siendo así, cabe preguntarse por cuánto tiempo más el mantenimiento de este régimen especial contará con una cobertura constitucional y legal suficiente, muy independientemente de las loables intenciones que podrían guiar a quienes han permitido su permanencia. En ese sentido, considero que éste representa un punto sobre cuyos alcances conviene conversar.
7. Por último, conviene pronunciarse si en mérito a la propia estructura del Tribunal Constitucional peruano, los procesos que allí se atienden y lo que implica materializar las sentencias ya emitidas, este Alto Tribunal cuenta con la debida capacidad operativa e institucional para afrontar los problemas existentes en el escenario aquí descrito.
5. Adelantando algo de esa discusión, convendría señalar que si bien es cierto que el ejercicio de las competencias explícitas e implícitas de un Tribunal Constitucional puede reivindicar ciertas funciones y potestades para sí, aunque no se encuentran expresamente reconocidas para él, siempre y cuando se encuentren dentro de lo "constitucionalmente necesario", y no, como alegan algunos, de lo "constitucionalmente posible". Señalo esto en mérito a que considero que, en estricto respeto a una separación de funciones y un criterio de corrección funcional, el Tribunal Constitucional peruano debe entender que en rigor a quien corresponde solucionar la problemática en torno a la aún permanencia del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) es al legislador.
6. Lo recientemente señalado, por cierto, no debe llevar al inmovilismo de un Tribunal Constitucional, cuya labor es precisamente la de defender y promover la fuerza normativa de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos, labor que, por cierto, implica resolver conforme a Derecho, inclusive muy a despecho de los vacíos o insuficiencias que pueda presentar el ordenamiento jurídico vigente del país donde le toca actuar.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03959-2016-PA/TC

LIMA

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (SITRAMUN-LIMA), representado por CÉSAR DAGOBERTO PASSALACQUA PEREYRA (SECRETARIO GENERAL)

7. Estamos pues ante materias sobre las cuales se hace necesario conversar, y evaluar lo decidido en su momento, máxime cuando se aprecia que no se están produciendo los cambios legislativos que este Tribunal Constitucional había tomado como presupuesto para decidir en determinado sentido en las controversias que resuelve en relación a este régimen especial.
8. Como síntesis entonces a este primer tema, en tanto y en cuanto el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) se encuentra plenamente vigente y su constitucionalidad ha sido confirmada, todavía seguirán existiendo pronunciamientos que guarden coherencia con dicha posición. Sin embargo, resulta indispensable analizar si lo ahora previsto permite una participación del Tribunal Constitucional peruano que, sin romper los parámetros constitucional o legalmente necesarios y su real capacidad operativa, pueda afrontar los problemas derivados de la supervivencia de este régimen especial, más allá de lo inicialmente proyectado.
9. Ahora bien, también existe un segundo tema que anotar; y es que la labor del juez constitucional, que tiene por fin último el reconocimiento y la tutela de los derechos, debe, precisamente, superar cualquier dificultad, limitación o formalidad que dificulte ese quehacer. En ese sentido, debe dejarse de lado cualquier interpretación formalista de una norma o un concepto. Además, debe corregirse en sede de la interpretación constitucional cualquier lectura formalista y en puridad técnicamente incorrecta de la normatividad vigente, máxime si se trata de tutelar los derechos.

S.

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA

Lo que certifico:

JANET OTÁROLA CANTILLANA
Secretaria de la Sala Segunda
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03959-2016-PA/TC

LIMA

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (SITRAMUN LIMA), representado por CÉSAR DAGOBERTO PASSALACQUA PEREYRA (SECRETARIO GENERAL)

VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO FERRERO COSTA

Con la potestad que me otorga la Constitución, y con el mayor respeto por la ponencia de mi colega magistrado, emito el presente voto singular, para expresar respetuosamente que disiento del precedente vinculante establecido en la Sentencia 00987-2014-PA/TC, SENTENCIA INTERLOCUTORIA DENEGATORIA, por los fundamentos que a continuación expongo:

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO CORTE DE REVISIÓN O FALLO Y NO DE CASACIÓN

1. La Constitución de 1979 creó el Tribunal de Garantías Constitucionales como instancia de casación y la Constitución de 1993 convirtió al Tribunal Constitucional en instancia de fallo. La Constitución del 79, por primera vez en nuestra historia constitucional, dispuso la creación de un órgano *ad hoc*, independiente del Poder Judicial, con la tarea de garantizar la supremacía constitucional y la vigencia plena de los derechos fundamentales.
2. La Ley Fundamental de 1979 estableció que el Tribunal de Garantías Constitucionales era un órgano de control de la Constitución, que tenía jurisdicción en todo el territorio nacional para conocer, *en vía de casación*, de los *habeas corpus* y amparos denegados por el Poder Judicial, lo que implicó que dicho Tribunal no constituía una instancia habilitada para fallar en forma definitiva sobre la causa. Es decir, no se pronunciaba sobre los hechos invocados como amenaza o lesión a los derechos reconocidos en la Constitución.
3. En ese sentido, la Ley 23385, Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, vigente en ese momento, estableció, en sus artículos 42 al 46, que dicho órgano, al encontrar una resolución denegatoria que ha violado la ley o la ha aplicado en forma errada o ha incurrido en graves vicios procesales en la tramitación y resolución de la demanda, procederá a casar la sentencia y, luego de señalar la deficiencia, devolverá los actuados a la Corte Suprema de Justicia de la República (reenvío) para que emita nuevo fallo siguiendo sus lineamientos, procedimiento que, a todas luces, dilataba en exceso los procesos constitucionales mencionados.
4. El modelo de tutela ante amenazas y vulneración de derechos fue seriamente modificado en la Constitución de 1993. En primer lugar, se amplían los mecanismos de tutela de dos a cuatro, a saber, *habeas corpus*, amparo, *habeas data*



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03959-2016-PA/TC

LIMA

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (SITRAMUN LIMA), representado por CÉSAR DAGOBERTO PASSALACQUA PEREYRA (SECRETARIO GENERAL)

y acción de cumplimiento. En segundo lugar, se crea al Tribunal Constitucional como órgano de control de la constitucionalidad, aun cuando la Constitución lo califica erróneamente como "órgano de control de la Constitución". No obstante, en materia de procesos constitucionales de la libertad, la Constitución establece que el Tribunal Constitucional es instancia de revisión o fallo.

5. Cabe señalar que la Constitución Política del Perú, en su artículo 202, inciso 2, prescribe que corresponde al Tribunal Constitucional *"conocer, en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias dictadas en los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y acción de cumplimiento"*. Esta disposición constitucional, desde una posición de franca tutela de los derechos fundamentales, exige que el Tribunal Constitucional escuche y evalúe los alegatos de quien se estima amenazado o agraviado en un derecho fundamental. Una lectura diversa contravendría mandatos esenciales de la Constitución, como son el principio de defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad como fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1), y *"la observancia del debido proceso y tutela jurisdiccional. Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto cualquiera sea su denominación"*, consagrada en el artículo 139, inciso 3.
6. Como se advierte, a diferencia de lo que acontece en otros países, en los cuales el acceso a la última instancia constitucional tiene lugar por la vía del *certiorari* (Suprema Corte de los Estados Unidos), en el Perú el Poder Constituyente optó por un órgano supremo de interpretación de la Constitución capaz de ingresar al fondo en los llamados procesos de la libertad cuando el agraviado no haya obtenido una protección de su derecho en sede del Poder Judicial. En otras palabras, si lo que está en discusión es la supuesta amenaza o lesión de un derecho fundamental, se debe abrir la vía correspondiente para que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse. Pero la apertura de esta vía solo se produce si se permite al peticionante colaborar con los jueces constitucionales mediante un pormenorizado análisis de lo que se pretende, de lo que se invoca.
7. Lo constitucional es escuchar a la parte como concretización de su derecho irrenunciable a la defensa; además, un Tribunal Constitucional constituye el más efectivo medio de defensa de los derechos fundamentales frente a los poderes públicos y privados, lo cual evidencia el triunfo de la justicia frente a la arbitrariedad.

MPH



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03959-2016-PA/TC

LIMA

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (SITRAMUN LIMA), representado por CÉSAR DAGOBERTO PASSALACQUA PEREYRA (SECRETARIO GENERAL)

EL DERECHO A SER OÍDO COMO MANIFESTACIÓN DE LA DEMOCRATIZACIÓN DE LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES DE LA LIBERTAD

8. La administración de justicia constitucional de la libertad que brinda el Tribunal Constitucional, desde su creación, es respetuosa, como corresponde, del derecho de defensa inherente a toda persona, cuya manifestación primaria es el derecho a ser oído con todas las debidas garantías al interior de cualquier proceso en el cual se determinen sus derechos, intereses y obligaciones.
9. Precisamente, mi alejamiento respecto a la emisión de una resolución constitucional sin realizarse audiencia de vista está relacionado con la defensa, la cual, sólo es efectiva cuando el justiciable y sus abogados pueden exponer, de manera escrita y oral, los argumentos pertinentes, concretándose el principio de inmediación que debe regir en todo proceso constitucional.
10. Sobre la intervención de las partes, corresponde señalar que, en tanto que la potestad de administrar justicia constituye una manifestación del poder que el Estado ostenta sobre las personas, su ejercicio resulta constitucional cuando se brinda con estricto respeto de los derechos inherentes a todo ser humano, lo que incluye el derecho a ser oído con las debidas garantías.
11. Cabe añadir que la participación directa de las partes, en defensa de sus intereses, que se concede en la audiencia de vista, también constituye un elemento que democratiza el proceso. De lo contrario, se decidiría sobre la esfera de interés de una persona sin permitirle alegar lo correspondiente a su favor, lo que resultaría excluyente y antidemocrático. Además, el Tribunal Constitucional tiene el deber ineludible de optimizar, en cada caso concreto, las razones, los motivos y los argumentos que justifican sus decisiones, porque el Tribunal Constitucional se legitima no por ser un tribunal de justicia, sino por la justicia de sus razones, por expresar de modo suficiente las razones de derecho y de hecho relevantes en cada caso que resuelve.
12. En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el derecho de defensa *"obliga al Estado a tratar al individuo en todo momento como un verdadero sujeto del proceso, en el más amplio sentido de este concepto, y no*



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03959-2016-PA/TC

LIMA

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (SITRAMUN LIMA), representado por CÉSAR DAGOBERTO PASSALACQUA PEREYRA (SECRETARIO GENERAL)

*simplemente como objeto del mismo"*¹, y que *"para que exista debido proceso legal es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables"*².

NATURALEZA PROCESAL DEL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL

13. El modelo de "instancia de fallo" plasmado en la Constitución no puede ser desvirtuado por el Tribunal Constitucional si no es con grave violación de sus disposiciones. Dicho Tribunal es su intérprete supremo, pero no su reformador, toda vez que como órgano constituido también está sometido a la Constitución.
14. Cuando se aplica a un proceso constitucional de la libertad la denominada "sentencia interlocutoria", el recurso de agravio constitucional (RAC) pierde su verdadera esencia jurídica, ya que el Tribunal Constitucional no tiene competencia para "revisar" ni mucho menos "recalificar" el recurso de agravio constitucional.
15. De conformidad con los artículos 18 y 20 del Código Procesal Constitucional, el Tribunal Constitucional no "concede" el recurso. Esta es una competencia de la Sala Superior del Poder Judicial. Al Tribunal lo que le corresponde es conocer del RAC y pronunciarse sobre el fondo. Por ende, no le ha sido dada la competencia de rechazar dicho recurso, sino por el contrario de "conocer" lo que la parte alega como un agravio que le causa indefensión.
16. Por otro lado, la "sentencia interlocutoria" establece como supuestos para su aplicación fórmulas imprecisas y amplias cuyo contenido, en el mejor de los casos, requiere ser aclarado, justificado y concretado en supuestos específicos, a saber, identificar en qué casos se aplicaría. No hacerlo, no definirlo, ni justificarlo, convierte el empleo de la precitada sentencia en arbitrario, toda vez que se podría afectar, entre otros, el derecho fundamental de defensa, en su manifestación de ser oído con las debidas garantías, pues ello daría lugar a decisiones subjetivas y carentes de predictibilidad, afectando notablemente a los justiciables, quienes

¹ Corte IDH. Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, sentencia del 17 de noviembre de 2009, párrafo 29.

² Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago, sentencia del 21 de junio de 2002, párrafo 146.



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL



EXP. N.º 03959-2016-PA/TC

LIMA

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA (SITRAMUN LIMA), representado por CÉSAR DAGOBERTO PASSALACQUA PEREYRA (SECRETARIO GENERAL)

tendrían que adivinar qué resolverá el Tribunal Constitucional antes de presentar su respectiva demanda.

17. Por lo demás, *mutatis mutandis*, el precedente vinculante contenido en la Sentencia 00987-2014-PA/TC repite lo señalado por el Tribunal Constitucional en otros fallos, como en el caso Luis Sánchez Lagomarcino Ramírez (Sentencia 02877-2005-PHC/TC). Del mismo modo, constituye una reafirmación de la naturaleza procesal de los procesos constitucionales de la libertad (supletoriedad, vía previa, vías paralelas, litispendencia, invocación del derecho constitucional líquido y cierto, etc.).
18. Sin embargo, el hecho de que los procesos constitucionales de la libertad sean de una naturaleza procesal distinta a la de los procesos ordinarios no constituye un motivo para que se pueda desvirtuar la esencia principal del recurso de agravio constitucional.
19. Por tanto, si se tiene en cuenta que la justicia en sede constitucional representa la última posibilidad para proteger y reparar los derechos fundamentales de los agraviados, voto a favor de que en el presente caso se convoque a audiencia para la vista, lo que garantiza que el Tribunal Constitucional, en tanto instancia última y definitiva, sea la adecuada para poder escuchar a las personas afectadas en sus derechos esenciales cuando no encuentran justicia en el Poder Judicial; especialmente si se tiene en cuenta que, agotada la vía constitucional, al justiciable solo le queda el camino de la jurisdicción internacional de protección de derechos humanos.
20. Como afirmó Raúl Ferrero Rebagliati, "la defensa del derecho de uno es, al mismo tiempo, una defensa total de la Constitución, pues si toda garantía constitucional entraña el acceso a la prestación jurisdiccional, cada cual al defender su derecho está defendiendo el de los demás y el de la comunidad que resulta oprimida o envilecida sin la protección judicial auténtica".

S.

FERRERO COSTA

Lo que certifico:

JANET OTÁROLA SANTILLANA
Secretaria de la Sala Segunda
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL